

MUCHA PROTESTA, POCOS CAMBIOS

La protesta social es sinónimo de conflicto en el Perú. Conflicto que se levanta frente a los oídos sordos del Estado. La dinámica del conflicto es insistente: los reclamos se inician por la vía formal pero las autoridades no responden, los efectos de la indiferencia estatal son las movilizaciones y la protesta social –que generalmente se inicia de manera pacífica– y rápidamente deviene en algún tipo de violencia. El método privilegiado es el bloqueo de carreteras, una vieja estrategia de lucha de la población campesina. Pero, lamentablemente, la multiplicidad de protestas sociales no llegan a articularse y los reclamos quedan dispersos en la compleja arena política.

Javier Torres Seoane

javierto@ser.org.pe

Antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido director de la Asociación SER y ha realizado diversas consultorías sobre conflictos, participación y derechos humanos para instituciones públicas y privadas de su país. Ha escrito artículos de opinión en los diarios *El Comercio*, *La República* y *Correo*. Actualmente es columnista de *Diario 16* y Director de la revista virtual *Noticias SER* www.noticiasser.pe. Asimismo tiene un blog llamado El Arriero <http://elarriero.lamula.pe/>.

Las dinámicas del conflicto

En Perú la protesta social se la denomina “conflicto”. Y con este término se han creado una serie de programas y oficinas estatales que atienden y dan seguimiento a las diversas movilizaciones y protestas que ocurren a lo largo y ancho del país. La primera institución en intentar atender y entender de una manera sistemática los conflictos fue la Defensoría del Pueblo que, luego de una protesta en Llave –al sur del Perú– que tuvo como desenlace el asesinato de su alcalde en la plaza pública delante de cientos de pobladores, decidió crear una oficina que diera seguimiento a diversos conflictos.

Aunque los conflictos en el Perú se dan por diversos motivos, tienen un curso similar. Los reclamos se inician por la vía formal –que tiene vieja data en el Perú–: Memoriales y Oficios, dirigidos a autoridades que no dan respuesta y que mandan los mismos al archivo sin que nadie tome en cuenta el reclamo. Luego, ante la indiferencia estatal se desarrolla algún tipo de movilización, que si bien se inicia de manera pacífica, rápidamente deviene en algún tipo de violencia. El método privilegiado es el bloqueo de carreteras tanto en la costa como en la sierra y en la selva el bloqueo es del curso de los ríos. Este es un viejo método de lucha de la población campesina, quienes ven en ésta la única manera de llamar la atención sobre el resto del país.

El bloqueo de carreteras no era delito en el Perú hasta hace unos años cuando se produjeron una serie de decretos que criminalizaban la protesta, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001–2006). El hecho es que, a pesar de la sanción, los movilizadores siguen utilizando un método que lleva a los pocos días de iniciado –dependiendo de la importancia de la vía bloqueada para la economía nacional– a alguna medida represiva en la que la Policía Nacional del Perú (PNP), normalmente usando gases lacrimógenos y perdigones, despeja la vía. Aunque los muertos y heridos que se producen permiten que luego de la represión se instale algún mecanismo de diálogo, usualmente una “mesa de diálogo” donde en un contexto poco favorable al consenso se firman, bajo presión y bajo tensión, largas actas de compromiso que son presentadas por el gobierno como la “feliz” solución al conflicto. Así, quienes un día antes eran presentados como extremistas, son legitimados por el mismo Estado que los estigmatizaba. Una foto de las partes saludándose y sonriendo suele ser el desenlace de un acto que está lejos de ser el “final feliz” que algunos medios quieren mostrar.

Al alejarse los reflectores y volver a la normalidad, las mesas de diálogo se van extinguiendo lentamente. Usualmente porque las partes vuelven a las posiciones intransigentes del inicio, o simplemente por la negligencia de los funcionarios a cargo que dejan de asistir a las reuniones hasta la siguiente protesta. Y el ciclo se reinicia con una mayor radicalización de quienes se movilizan y probablemente con nuevos dirigentes quienes deben tener una actitud más confrontacional que la de sus antecesores.

¿Quiénes protestan?

Visto desde fuera o desde la lectura de los informes mensuales de la Adjuntía para la prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo del Perú, éste aparece como un país con una enorme diversidad de conflictos. Un desprevenido lector podría pensar que existe un vigoroso movimiento social que pone en jaque la política del gobierno de turno. Nada más lejano de la realidad, ya que a diferencia de los años 70 y 80 los grandes gremios nacionales de trabajadores o campesinos, como la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) o la Confederación Campesina del Perú (CCP), no tienen la capacidad de construir una agenda que englobe las diferentes protestas y movilizaciones. De ello dan fe una serie de jornadas de lucha convocadas por estos gremios que normalmente han sido rotundos fracasos lejos de los grandes paros nacionales de hace más de 30 años, cuando estos gremios pudieron poner en jaque a gobiernos militares.

Siendo así, la pregunta es ¿Y entonces, quién está detrás de estas protestas? Y aunque los gobiernos de los presidentes Toledo y Alan García han buscado acusar a grupos de extrema izquierda como Patria Roja y el inexistente Puka LLacta, a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONG), a algunos medios de comunicación social, al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez y a las casas de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), lo real y concreto es, que la gran mayoría de las protestas son de escala local, en pocos casos de escala regional, muchas veces son bastante espontáneas y por ello fácilmente desmovilizables. A diferencia de lo que piensa el gobierno y cierto sector de la empresa privada, estas protestas antes que ser expresión de un movimiento antisistema que busca poner en cuestión al modelo económico neoliberal y al régimen democrático, en la mayoría de los casos buscan defender ciertos modos de vida que corren el riesgo de ser arrasados o avasallados por la expansión del capitalismo extractivo, o simplemente buscan aprovechar y acceder a los beneficios que genera esta presencia. Quienes protestan abogan por un cambio radical en las reformas que se dieron en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990–2000), cuando éste en aplicación de las ideas del llamado “Consenso de Washington” desmanteló el Estado empresario que fue herencia del régimen nacional de Juan Velasco Alvarado (1968–1975) y reprivatizó la economía, con un nivel de desregulación de la economía mayor al de otros países de la región.

El movimiento amazónico

El conflicto social en el Perú de la primera década del presente siglo es una de las principales herencias del régimen autoritario de Fujimori, cuyo diseño de la economía permanece intocado, ya que el régimen de transición que lo sucedió no lo puso en cuestión y centró la crítica a dicho gobierno en la inmensa corrupción que

se desarrolló en aquellos años y en las graves violaciones a los derechos humanos, razones por la cual el ex presidente Fujimori ha sido condenado y está preso en una cárcel “dorada” en Lima. El hecho es, que los gobiernos de Toledo y sobre todo de García no solo mantuvieron el modelo sino que en el caso del segundo lo han profundizado, e incluso el actual Presidente del Perú le ha dado un sustento textual a través de una serie de artículos conocidos como “El Perro del Hortelano”. El artículo “*El síndrome del perro del hortelano*” fue publicado el 28 de octubre de 2007 en el periódico de línea conservadora *El Comercio*, allí el Presidente se refirió con la comedia “*El perro del hortelano*” de Lope de Vega Carpio –cuyo título hace alusión al refrán “*El perro del hortelano no come ni deja comer*”– a quienes protagonizaran la lucha más poderosa en la historia reciente de Perú.

En este artículo García afirmó: “*Y los de siempre dicen: “Que me den más sin que yo cambie y sin que haga ningún esfuerzo”(...). Frente a la filosofía engañosa del perro del hortelano, la realidad nos dice que debemos poner en valor los recursos que no utilizamos y trabajar con más esfuerzo. Y también nos lo enseña la experiencia de los pueblos exitosos, los alemanes, los japoneses, los coreanos y muchos otros. Y esa es la apuesta del futuro, y lo único que nos hará progresar*”¹.

García propuso con estos artículos el aprovechamiento al máximo de los diversos recursos naturales de nuestro país, la privatización y concesión de los mismos, en especial aquellos de la sierra peruana y de la amazonía, para lo cual había que superar algunos vicios de nuestra historia republicana como la visión paternalista hacia la población de aquellos lugares que, por la legislación son las propietarias de la mayoría de las tierras a través de las comunidades campesinas en la costa, sierra y las comunidades nativas en la selva. Incluso llegó a afirmar que en el caso de la amazonía los indígenas en asilamiento voluntario eran una invención de los antropólogos. Para García, en resumen el Perú podrá salir de su atraso si entiende que se debe modernizar y aprovechar los terrenos baldíos llenos de riqueza. En el fondo, lo único que estaba haciendo el Presidente con este discurso era repetir viejos discursos del Siglo XIX y enterrando cien años de esfuerzos de la antropología peruana por hacer comprender a la sociedad su diversidad y el dinamismo de las poblaciones indígenas.

De alguna manera, esta declaración de guerra del converso Presidente García – que en su primer gobierno (1985–1990) buscó desafiar el liderazgo de Fidel Castro en el movimiento no alineado y ordenó la suspensión del pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional (FMI)– tuvo su respuesta en una movilización en la Amazonía a propósito del desarrollo legislativo de las ideas del “Perro del Hortelano”.

¹ http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html

Así, aprovechando que el congreso había delegado facultades legislativas al ejecutivo peruano para adecuar la legislación al Acuerdo de Promoción Comercial Perú–Estados Unidos, más conocido como TLC, el gobierno aprovechó para aprobar un conjunto de decretos legislativos² que nada tenían que ver con el TLC en mención y que facilitaban la venta o arrendamiento de las tierras de las comunidades, así como importantes cambios en la legislación forestal con miras a cambiar el régimen de bosques de ciertas tierras para poder utilizarlos en plantaciones de biocombustibles. Las negociaciones, reuniones y demás se dieron casi a lo largo de un año y entre uno y otro, y tuvieron un trágico desenlace cuando el gobierno decidió desalojar a un grupo muy grande de indígenas con violencia en la llamada “Curva del Diablo” y la reacción casi inmediata de otros nativos que a unas horas del lugar tenían retenidos a un grupo de policías a quienes asesinaron en la llamada “Estación Seis”.

La Tragedia de Bagua, como se le conoce a estos hechos, mostraron los límites de las partes en conflicto. De un lado, una organización nacional amazónica como la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP) y sus líderes incapaces de controlar a la población que ellos habían movilizado. Del otro lado, el gobierno que al aplicar el método represivo como única vía de solución al conflicto, lo único que generó fue un enorme rechazo de la población, y que el 92% de la ciudadanía considerara que los nativos indígenas tenían el derecho a ser consultados sobre las decisiones que se tomen sobre sus tierras y territorios.

A su vez los meses siguientes mostraron ante los ojos de la ciudadanía, que normalmente no le presta mucha atención al post conflicto, la pobreza del mecanismo de las mesas de dialogo y las comisiones investigadoras donde al final no se logró ningún tipo de consenso, y hasta la fecha a pesar de que varios decretos fueron derogados, la agenda sigue abierta, el conflicto no se ha resuelto y los procesos judiciales avanzan lentamente y sin interés en que se logre identificar a los responsables de los crímenes de ambas partes. Si bien el conflicto amazónico no ha sido el único fue quizás el que más cobertura mediática tuvo y el que además permitió la emergencia de un nuevo actor en el conflicto, que será el principal escenario de conflicto en los próximos años en el Perú: La amazonía; pero antes de continuar con ella regresemos a los Andes.

El conflicto minero

La minería es una actividad de larga data en el Perú y en la sierra peruana en particular, donde fue una actividad central en el régimen colonial español, mientras

² Decretos legislativos promulgados en junio de 2008, que pusieron en acción el movimiento amazónico reclamando su derogación.

que en el Siglo XX estuvo identificada con empresas trasnacionales que si bien generaron cierto bienestar y atención a sus empleados, fue una enorme fuente de contaminación de tierras, ríos y lagunas. Por esa razón, en el imaginario popular la minería es sinónimo de explotación. Explotación y contaminación. Sin embargo, cuando el Presidente Fujimori dio una serie de normas para el ingreso de nuevos capitales para explotar los enormes recursos del subsuelo peruano, se iniciaron algunos proyectos y estos fueron bien recibidos por la población, ya que el Perú salía de una enorme crisis económica.

El caso paradigmático es el de Minera Yanacocha S.A. (MYSA) que se instaló en Cajamarca, en la sierra norte del Perú e inició operaciones en 1993. Si bien hubo algunas denuncias iniciales por un mal manejo en la compra de tierras, y algunas quejas de la población local por el alza del costo de vida, la convivencia entre agricultura y minería parecía que transcurriría sin enormes conflictos. Sin embargo, en el año 2001 el fantasma de la contaminación se hizo realidad cuando el camión de una empresa que prestaba servicios a MYSA derramó mercurio en la comunidad de Choropampa en Cajamarca, hecho que la empresa quiso ocultar y que luego tuvo que reconocer. A partir de ese momento la empresa se ubicó en el ojo de la tormenta y sus acciones fueron vistas con mayor atención por la opinión pública cajamarquina. Y en el año 2004 ante la posibilidad del inicio de la explotación en una zona de expansión que diversos ambientalistas cajamarquinos, como el padre Marco Arana, habían alertado que se ubicaba en las fuentes que dan agua a la ciudad, llevó a una movilización enorme en Cajamarca en defensa del cerro Quilish.

El desenlace de este conflicto llevó a que MY tuviera que suspender operaciones y solicitar disculpas públicas por el pasivo social y ambiental que había acumulado en su primera década de presencia, e iniciara una nueva política que llevó a que se constatará que la empresa al estilo del Gobierno Nacional, había adquirido la mala práctica de firmar actas de compromiso que no cumplía y a las cuales ni siquiera daba seguimiento, dando inicio a una nueva etapa de trabajo. Pero a los 2 años, justamente al inicio del segundo gobierno del Presidente García, una movilización en reclamo por contratos de trabajo para empresas comunales derivó en un conflicto que terminó siendo resuelto en la mismísima sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, y aunque hasta la fecha nadie sabe quién mató al campesino Isidro Llanos en Combayo, el hecho catapultó como figura nacional al padre Marco Arana y definió un nuevo estilo en el manejo de conflictos liderado por el entonces primer ministro Jorge Del Castillo, en el cual éste se constituía en los lugares de conflicto.

Pero, el problema de la minería no solo tenía que ver con fuentes de agua y con contaminación. Otros conflictos comenzaron a surgir en el país que llevaron a nuevas protestas vinculadas al acceso de los recursos del canon. El canon no es otro que el % de impuesto a la renta pagado por las mineras que retorna a las localidades donde éste se produce y que se distribuye a los diferentes niveles de gobierno en

distintos porcentaje. Así, un porcentaje va al gobierno regional otro al provincial y por último al distrital. Este sistema ha sido cambiado en más de una oportunidad pero es percibido por la ciudadanía y autoridades de estos lugares como un “derecho adquirido”. El problema es que en varios casos las minas se encuentran en los límites de departamentos, provincias y distritos, que por la lenidad de la burocracia estatal nunca han sido bien delimitados en el Perú. La consecuencia ha sido que límites que nunca tuvieron la menor importancia, se han convertido en la razón de diversos conflictos en donde las protestas no se dirigen contra el gobierno nacional o la empresa, sino que se convierten en una suerte de “guerra civil” entre regiones, provincias y distritos. Al final, estos tampoco hayan fácil resolución y se han expandido a otros temas como el control de ciertas lagunas en los límites que también generan canon o recursos cuando se entregan en uso a las empresas que explotan mineral.

En este escenario llama la atención que no haya un actor social central en el desarrollo de las protestas y movilizaciones contra la minería. El principal esfuerzo de articulación ha sido la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) liderada por Miguel Palacín –que ha derivado a una agenda política indigenista– y Mario Palacios, líderes actualmente de dos facciones del movimiento. Lo cierto es que CONACAMI a pesar de contar con el apoyo de ONG nacionales y extranjeras nunca pasó de ser un cascarón sin mayores bases asentadas en el territorio y el conflicto por tanto siguió la dinámica que los actores locales enfrentados a las empresas quisieron darle. Esto se produce en buena medida porque las relaciones que establecen las empresas con las comunidades tienen diferentes lógicas, según cuál sea el perfil de la empresa y cuánto valoren las relaciones comunitarias en su trabajo. Frente a lo cual CONACAMI y sus aliados siempre han actuado con una única agenda que no entiende la diversidad de situaciones que plantean reglas de juego distintas propuestas por las empresas, y en las que el Estado juega un tímido rol.

Sin embargo, fue en un escenario no tradicional de la minería y donde no existía una gran empresa donde el movimiento “antiminero” logró sus principales éxitos. Así, en la región Piura, en un valle agro exportador de mangos primero y luego en los páramos de la frontera serrana con el Ecuador, la protesta fue canalizada hacia un sistema de consultas populares, que apelando a la legislación peruana llevaron a la organización de un referéndum en Tambogrande en el 2005 y otro en tres distritos de las provincias de Ayabaca y Huancabamba en el 2009, en los que masivamente la población rechazó la presencia minera con diferente desenlace, ya que mientras que en el primero la empresa terminó perdiendo la concesión gracias a una jugada del gobierno para no quedar tan mal parado frente a los inversionistas, en el caso del proyecto “Majaz” a pesar del resultado la empresa pasó de capitales ingleses a manos de la empresa china Zijin, la misma que continúa con el proyecto a pesar del rechazo de la población.

Lo importante del caso es que sirvió para hacer evidente no solo el enorme rechazo a la minería de poblaciones que temen que su economía y sus formas de vida desaparezcan ante la presencia de las mineras y el consiguiente control de los recursos tierra y agua, y para constatar que la presencia del capital chino en la minería peruana iba en avance. Así, Zijin se sumaba a dos grandes empresas ya presentes, por un lado una en la costa sur en la zona de Marcona donde poca gente había tomado conocimiento del durísimo manejo laboral y el poco respeto por las normas ambientales de la empresa Shougang, y por otro lado y con otro perfil, la empresa Chinalco sumida en un conflicto con otra empresa nacional llamada Volcán de propiedad de uno de los hombres más ricos del Perú. El hecho concreto es que a todas luces las empresas de China no cuentan con los mismos estándares ambientales que las de carácter trasnacional y que su manejo al estar vinculado al Estado chino se desenvuelve en una lógica distinta a la de las empresas de capital exclusivamente privado. Lo que pueda ocurrir en Majaz y Chinalco en los próximos años nos puede dar la pauta del manejo que estas empresas hagan en torno a las protestas.

El conflicto por la energía

Pero los chinos no son el único nuevo actor en el Perú hay otro más cercano, no por ello mejor conocido, el Estado Brasileiro y un conjunto de empresas privadas que de manera conjunta y en el marco de la política de integración regional interamericana –y otros esfuerzos como la Unión de Naciones Sudamericanas (UNANSUR)– ha venido promoviendo la construcción de la carretera interoceánica, y en los últimos meses ha logrado la aprobación del Acuerdo Energético Perú – Brasil, por el cual se construirían en la amazonía peruana una serie de hidroeléctricas que ya han generado acciones de protestas y lobby a nivel nacional e internacional en contra de dos proyectos: Inambari, ubicado en los límites de los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios, y Pakitzapango que está ubicado en territorio Asháninka, una de las etnias más importantes de la amazonía peruana.

La razón del conflicto es bastante sencilla. Las represas significan desplazamiento de población y la inundación de amplios terrenos que están bajo la propiedad de comunidades nativas y colonos serranos. Según cálculos extraoficiales, en los próximos años por estos proyectos y otros similares cerca de 100,000 personas deberán desplazarse, una cifra que aunque es menor que la de los 500,000 que se desplazaron por el conflicto armado interno no es poca cosa. Frente a estos hechos, la población de Inambari, por ejemplo, ha realizado diversas movilizaciones que además han logrado el apoyo de casi la totalidad de líderes políticos de la región Puno y de buena cantidad de la población. La represa no solo inundará tierras sino incluso un tramo de la carretera interoceánica de reciente construcción y que en el caso de Puno además se logró luego de una serie de protestas en el año 2001 cuando

el gobierno peruano había decidido que el trazo sería por el Cusco. Estas protestas, como en los casos anteriores, no cuentan con actores sociales de envergadura nacional involucrados, siendo el principal aliado de los colonos diversas ONG ambientalistas y de desarrollo que operan en la región. Mientras que en el caso de los nativos de Pakitzapango la situación es bastante parecida, aunque ellos, gracias a su condición de pueblo indígena hayan podido elevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El hecho de que no existan gremios nacionales campesinos de fuerza o que el movimiento indígena amazónico haya sufrido duros golpes como consecuencias del conflicto de Bagua, hace que este tema no tenga todavía el impacto que las protesta mineras tienen. A lo cual se suma que ningún partido político haya asumido el tema e incluso debido a la cercanía entre el Partido Nacionalista liderado por Ollanta Humala con el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), simplemente el tema ha sido evitado para no incomodar al gran vecino brasilero. En donde este grupo –el más representativo de la izquierda peruana en este momento– ha tenido una mayor participación ha sido en el sector energético, el tema del Gas, que aunque es un recurso que se encuentra en la amazonía, ha sido siempre parte de la agenda de la región Cusco y motivo de debates y protestas sociales de diverso tipo desde hace cerca de treinta años, desde que la Shell anunció la existencia de gas en la localidad de Camisea en la provincia cusqueña de La Convención.

Justamente el gran tema de debate en los años ochenta vuelve a emerger y genera nuevas movilizaciones, el asunto es a quién debe beneficiar el gas y si este recurso debe ser destinado en primer lugar a la exportación o al consumo interno. Es por ello que recientemente se produjeron un conjunto de protestas y un paro que, aunque inicialmente anunciado como macro regional se limitó a la provincia de La Convención con el apoyo de la ciudad del Cusco y la provincia de Canchis. Lo que queda claro de la movilización es que las agendas no necesariamente son las mismas entre quienes en la provincia donde está el yacimiento buscan que el gas sea más barato, con quienes plantean que deben haber mayores rentas de este producto, y hasta hechos más localizados como cuál debe ser la ruta del gasoducto.

El caso del gas muestra nuevamente cómo en el Perú, si bien un recurso puede ser un punto de convergencia entre diversos actores políticos y sociales, cuando se desmenuza la agenda se constata que lo que prima en cada sector es la defensa de sus propios intereses.

El movimiento cocalero

Disgregado como todo en el Perú en diversos valles de la ceja de selva peruana, el movimiento cocalero buscó como otros sectores, articularse a nivel nacional para

lo cual creó la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACC) que a pesar de sus esfuerzos y de contar con una congresista y una parlamentaria andina no ha logrado tener un mayor peso que algunos gremios de valle, como es la Federación de Productores Agrarios del valle de los ríos Apurímac y Ene (FEPAVRAE) de Ayacucho. La agenda cocalera es bastante clara; No a la erradicación, legalización de la hoja de coca, apoyo a las políticas de industrialización y retiro de la “Drug Enforcement Administration” (DEA) del Perú. A pesar de sus avances y su fuerte presencia incluso a nivel político electoral local, los cocaleros no han pasado de tener una agenda de resistencia a la que algunos de sus líderes quisieron agregar la agenda indígena sin mucho éxito. Más de un analista y de un líder creyó que se podría replicar en el Perú el caso de Evo Morales, pero las diferencias son enormes y eso se ha puesto de manifiesto en más de una oportunidad.

El problema cocalero es un tema que no logra ser tratado como un problema social y económico, ya que desde el Estado se asume como un tema de carácter policial donde además constantemente intervienen las Fuerzas Armadas, y se mezclan las agendas vinculadas a los dos últimos focos de conflicto armado en el Perú que son los el Valle del Río Apurímac y Ene y el Valle del Huallaga, donde persisten los últimos jefes senderistas “Artemio” y “José”. Y si bien en ambos casos es por todos reconocido que Sendero Luminoso ha terminado convirtiéndose en un grupo de narcotraficantes o de apoyo a éstos, para el gobierno es importante mantener el fantasma del terrorismo porque es una manera de legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en los valles cocaleros y la estigmatización de los líderes cocaleros. Así, la lucha cocalera ha terminado siendo aislada al igual que otras por la incapacidad de sus dirigencias, pero además por la asociación estrecha que se hace de estos al narcotráfico y al terrorismo.

La estigmatización de la protesta

Un aspecto común a la protesta o al conflicto en el Perú ha sido su estigmatización, la misma que se ha dado a través de diversas campañas de prensa que han apuntado –con relativo éxito– a mostrar que la protesta genera básicamente violencia y que es un arma de los enemigos del desarrollo del país. En el caso de la capital, que es donde se concentran los principales medios, es claro que este tipo de conexión inmediatamente trae a la memoria de los limeños la violencia terrorista que Sendero Luminoso desató sobre todo a inicios de los años 90. Para el poblador limeño la palabra violencia se asocia inmediatamente con terrorismo y esto es herencia de lo que fue el control de los medios por parte del gobierno de Alberto Fujimori en los años noventa. Existen varios diarios de la capital que siguen manejando este patrón de comportamiento como son *Correo*, *Expreso* y *La Razón*. Así como algunos canales de televisión.

Las campañas de prensa tienen básicamente un patrón bastante similar. Normalmente son campañas de demolición en la que se busca mostrar o que existe un interés económico de quienes se movilizan como captar recursos de la cooperación internacional, o que existe algún interés político. Cuando estas campañas no funcionan incluso se llega a aspectos de índole personal, para lo cual algunas empresas de seguridad hacen servicio de reglaje y/o “chupones”. Una de las campañas más serias fue la llamada “Operación Diablo”, donde la empresa de seguridad Forza vinculada a personal de la Armada Peruana hizo seguimiento y espionaje a la oficina de una pequeña ONG crítica de la minería en Cajamarca, Grufides y a su director el padre Marco Arana. Asimismo, similares campañas se han desatado contra los líderes de la protesta amazónica, en particular contra Alberto Pizango, líder de AIDSESP a quien se le atacó por problemas en el manejo de las finanzas de su organización. Del mismo modo, contra Miguel Palacín líder de CONACAMI. En este caso como en otros, además las campañas han tenido como aliado al gobierno, en especial a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha filtrado información a la prensa sobre las cuentas de diversas ONG u organizaciones sociales que reciben fondos del extranjero.

Pero existen además otras formas más sofisticadas de restricción a la libertad de expresión en relación a la protesta social y es el cierre de emisoras de comunicación radial del interior del país. El caso emblemático ha sido la radio La Voz de Bagua que fue una de las principales fuentes de información de la protesta amazónica del año 2009 y a la que se le retiró la licencia de operaciones apelando a aspectos de corte burocrático, que en otros casos similares no eran tomados en cuenta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El caso al ser asumido por los principales medios de comunicación y el Instituto de Prensa y Sociedad permitió que la suspensión fuera revocada, aunque luego de varios meses.

Otro caso emblemático vinculado a las protestas amazónicas ha sido el intento de expulsión del país del misionero inglés Paul Mc Auley, así como del proceso al sacerdote italiano Mario Bartolini, quienes han sido importantes aliados de las poblaciones amazónicas en su crítica y denuncia por la contaminación de las empresas petroleras y por procesos irregulares de apropiación de tierras por parte de empresas productoras de biocombustibles. En ambos casos, el gobierno va más allá del ataque directo contra los líderes y apoya a quienes los apoyan o simpatizan con sus movilizaciones.

En general, todo aquel que de alguna manera se moviliza o hace la crítica al modelo será calificado como antisistema, violentista, extremista y contrario a los grandes intereses nacionales. Llegándose a tonos que parecen inverosímiles cuando algunas autoridades del gobierno criticaban a quienes cuestionaban el Proyecto Majaz como “prochilenos” apelando a la vieja rivalidad que existe en el Perú con Chile por la “Guerra del Pacífico” (1879–1883) porque al no poder explotar el cobre el Perú seguiría relegado frente a nuestro vecino del Sur.

A pesar de estas restricciones a la libertad de expresión en el Perú todos estos intentos han fracasado en gran medida porque a pesar de sus limitaciones hay una relativa capacidad de movilización y reacción frente a las situaciones planteadas. Así mismo, es importante señalar que a pesar de que existe un consenso conservador y pro modelo económico bastante amplio, existe también un importante sector de líderes de opinión que además de defender el modelo económico, sostienen que es fundamental el respeto a los derechos fundamentales a la institucionalidad democrática y a la libertad de expresión, y en más de una oportunidad han criticado al gobierno del Presidente García por la manera intolerante en que maneja los conflictos sociales. Asimismo, ha sido importante el soporte que diversas organizaciones de derechos humanos han brindado a líderes, activistas y organizaciones para llevar sus casos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o en los tribunales nacionales cuando han sido procesados acusados de violencia en las protestas e incluso acusados por la muerte de algunas personas.

La distancia entre la política y la movilización política

La visibilización de estos conflictos nos remiten a una paradoja de la democracia peruana: a pesar de que puedan existir 270 conflictos al mismo tiempo a lo largo y ancho del país, muy rara vez esto pone en peligro la estabilidad de una democracia en la que muy pocos creen pero que paradójicamente cuenta con innumerables mecanismos de democracia participativa, una significativa participación electoral y cientos de listas independientes que compiten por las alcaldías así como decenas de movimientos regionales y casi una treintena de partidos nacionales. Todo esto nos hablaría de una sociedad muy dinámica y con una intensa vida tanto a nivel de sociedad civil como de partidos políticos. Sin embargo, lo que en realidad expresa y podría ayudarnos a comprender esta contradicción entre poca creencia en la democracia y alta participación, movilización y protesta es la enorme fragmentación política y social del país que es una suerte de archipiélago donde en muy pocas ocasiones se da una convergencia de intereses entre quienes de un modo u otro reclaman por sus derechos. Este escenario es diametralmente distinto al que el Perú vivió 30 años atrás cuando las organizaciones sindicales jugaban un rol fundamental en la política peruana.

¿Qué ocurrió entonces para transitar de esta situación a la dispersión política del momento actual? Dos hechos centrales sin duda: el conflicto armado interno que se desarrolló entre 1980 y 1994 y las transformaciones de las relaciones entre el capital y el trabajo. En el caso de la violencia política en una historia que, si bien el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se describe, no ha sido todavía entendida en toda su magnitud; la violencia tanto de Sendero Luminoso como la del

Estado peruano arremetió contra gremios y sindicatos, así como contra sus principales dirigentes, muchos de los cuales fueron asesinados como Pedro Huilca, quien fuera secretario general de la CGTP o Saúl Cantoral secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, entre otros. Un movimiento sindical sumamente golpeado no estuvo en la capacidad de ofrecer mayor resistencia a las reformas neoliberales del gobierno de Fujimori, que puso fuera de la economía formal a miles de trabajadores. De otro lado, en la sociedad rural la guerra tuvo en la organización social un efecto similar al de un cataclismo, donde cientos de dirigentes, autoridades locales y comunales fueron asesinadas por Sendero Luminoso –para quien no había otro actor más que el partido conductor de la revolución– o desaparecidos por las fuerzas del orden, para quien todo dirigente social era considerado un “*terruco*” (terrorista). Así, la guerra y las reformas arrasaron con una larga tradición gremial que había sido clave en la lucha por los derechos de trabajadores en la ciudad y comunidades en el campo. Lo que quedó luego de esto no fueron más que cascarones organizativos, locales vacíos y la pérdida de la memoria de uno de los procesos más importantes del Siglo XX.

Pocas organizaciones quedaron en pie, una de ellas fue el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), que logró mantenerse unido, no debido a la afirmación de una ideología sino al pragmatismo de su dirigencia, que supo conseguir y mantener una serie de beneficios para sus afiliados a través de sucesivos paros nacionales y luego jornadas de protesta. Sin embargo, el otrora poderoso sindicato de pronto se encontró con enemigos desde varios frentes, desde el Estado primero, durante el gobierno de Toledo donde el Ministro de Educación Nicolás Lynch inició una fuerte presión para lograr que la dirigencia del SUTEP vinculada a Patria Roja perdiera la hegemonía, y luego profundizada por el gobierno de Alan García a través de reformas como la carrera pública magisterial resistida por el gremio. Mas el SUTEP tenía en su interior otro problema y era la existencia en algunas regiones –justamente las que fueron más afectadas por la violencia– de una corriente muy cercana a Sendero Luminoso, cuyo radicalismo tuvo su máxima expresión en el año 2004 cuando en la ciudad de Ayacucho y como consecuencia del desalojo de un grupo de profesores que habían tomado la municipalidad provincial de Huamanga, se generó una violenta asonada en la que se incendiaron varios locales públicos en el centro de la ciudad, lo que llevo a que algunos analistas hablaran del surgimiento del “*neosenderismo*”, como una expresión de un nuevo tipo de radicalismo violento no armado y que estaba infiltrado en diversas organizaciones sociales. Sin embargo, este grupo liderado por el profesor Robert Huaynalaya poco a poco fue perdiendo peso y su importancia cada vez es menor, pero el daño al SUTEP estaba hecho y el sindicato debilitado por dentro y por fuera sólo ha logrado mantenerse por un valioso recurso que ha sido muy bien administrado por ellos, la Derrama Magisterial, un fondo que el Estado le otorga al sindicato y que este maneja y controla. Sin embargo el SUTEP y

Patria Roja, a pesar de su debilidad, siguen siendo vistos por los actores del gobierno y por muchos analistas como el gran enemigo de la gobernabilidad o como el “Usual Suspect” en cuanto protesta y movilización hay en el Perú, salvo cuando se trata del movimiento cocalero, que es otro de los actores relevantes de la protesta social en el Perú de inicios del Siglo XXI.

Posiblemente el problema en el Perú es que al no haber partidos nacionales que de alguna manera articulen las demandas y las conviertan en intereses, toda protesta termina diluyéndose en sí misma, y no genera más que ligeros cambios en el escenario.

Perú, 17 de diciembre de 2010